



TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

CURSO ACADÉMICO 2019/2020

LA AUDIENCIA AL DEMANDADO REBELDE

THE NEW HEARING FOR NON-APPEARING DEFENDANT

AUTOR:

JAVIER PÉREZ PUENTE

DIRECTOR:

JUAN ANTONIO BERDEJO VIDAL

RESUMEN:

El presente trabajo de fin de grado tiene por objeto el análisis de una figura excepcional dentro de nuestro ordenamiento jurídico para la impugnación de sentencias firmes: la audiencia al demandado rebelde.

Tras un proceso en constante rebeldía por motivos no imputables al rebelde, el demandado puede intentar rescindir la sentencia firme dictada en rebeldía para que tenga lugar un nuevo proceso en el cual pueda ser escuchado.

Este mecanismo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil pretende salvaguardar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y, al mismo tiempo, preservar la seguridad jurídica inherente a todo el sistema jurídico.

ABSTRACT:

This end-of-degree work aims at the analysis of an exceptional figure within our legal system to vacate final judgments: the new hearing for non-appearing defendant.

After a trial in which the defendant has not appeared at any time for reasons not attributable to the non-appearing defendant, she may attempt to vacate the final default judgement so that a new process takes place in which can be heard.

This mechanism provided in Civil Procedure Law is intended to protect the fundamental right to effective judicial protection and, at the same time, preserving the legal certainty inherent in the entire legal system.

ÍNDICE:

1	LISTADO DE ABREVIATURAS.....	4
2	INTRODUCCIÓN.....	5
2.1	VISIÓN GENERAL.....	5
2.2	LA REBELDÍA.....	6
3	LA COSA JUZGADA	10
3.1	FIRMEZA E INVARIABILIDAD	10
3.2	COSA JUZGADA FORMAL Y MATERIAL	11
3.3	LÍMITES DE LA COSA JUZGADA	13
3.4	MEDIOS EXCEPCIONALES DE IMPUGNACIÓN DE LA COSA JUZGADA.....	15
4	LA AUDIENCIA AL REBELDE	18
4.1	CONCEPTO Y NATURALEZA.....	18
4.2	MOTIVOS QUE PERMITEN APRECIARLA	19
4.3	LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.....	20
4.4	FASES DE LA AUDIENCIA.....	22
5	CUESTIÓN SIN RESOLVER: ¿HASTA DÓNDE LLEGA LA RESCISIÓN?	26
6	VISIÓN JURISPRUDENCIAL ACTUAL	28
7	CONCLUSIONES.....	30
7.1	EXCEPCIONALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA	30
7.2	LA FUERZA MAYOR	31
7.3	LA FIGURA DEL EDICTO EN LA ACTUALIDAD	31
7.4	RESCISIÓN Y RECURSO: DIFERENCIAS Y SIMILITUDES	33
8	BIBLIOGRAFIA.....	35

1 LISTADO DE ABREVIATURAS

LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil

TC: Tribunal Constitucional

CE: Constitución Española

TS: Tribunal Supremo

AP: Audiencia Provincial

Art: Artículo

Secc: Sección

STS: Sentencia del Tribunal Supremo

2 INTRODUCCIÓN

2.1 VISIÓN GENERAL

Dispone el artículo 207.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo siguiente: *“son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado”*. Así mismo, el apartado tercero del mismo precepto nos dice que *“las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada ...”*¹

A pesar de lo dispuesto en dicho artículo, es el mismo cuerpo legal el que nos dice que, en ciertos casos, cabe la impugnación de resoluciones firmes a través de la impugnación de la llamada cosa juzgada. Es importante destacar que estos medios de impugnación son excepcionales. La cosa juzgada implica la firmeza e invariabilidad de las resoluciones, por lo que su impugnación sólo puede atender a motivos excepcionales previstos por la Ley, ya que implica nada menos que desconocer la inimpugnabilidad y la irrevocabilidad de las resoluciones judiciales. Se trata de una exigencia de la justicia frente a la seguridad².

Dentro de los medios excepcionales de impugnación de la cosa juzgada (a los cuales me referiré más adelante) está la llamada audiencia al demandado rebelde, la cual da título a este trabajo. Se trata, como ya he dicho, de un medio para impugnar la cosa juzgada. Esta audiencia no supone, prima facie, un nuevo proceso, sino un medio que da la posibilidad al demandado de impugnar la sentencia dictada en rebeldía y que sólo si es estimado habilita un eventual juicio rescisorio.

Antes de hablar de la audiencia al rebelde como tal es necesario explicar la rebeldía.

¹ Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («BOE» núm. 7, de 08/01/2000)

² MONTERO AROCA, Juan. “Impugnación de la cosa juzgada”. En: *“Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil”*. 27ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, página 512.

2.2 LA REBELDÍA

Al hablar de la rebeldía nos referimos a una postura del demandado frente a la demanda. Se trata, por tanto, de la actitud de no comparecer, la inactividad por parte del demandado frente a la demanda. Se trata de una posición que recae únicamente sobre la figura del demandado, el actor nunca puede ser rebelde.

Se podría decir que la expresión rebeldía está superada en el actual proceso civil. Rebelde es quien falta a la obediencia debida, y en el proceso civil no existen deberes sino cargas, la carga de comparecer, pero no un deber como tal.

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia de 3 de julio del 2009 señala lo siguiente: *"la nueva LEC recoge en su artículo 496 lo que era una declaración doctrinal y jurisprudencial, cual es que "la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda", consecuencia lógica de que no hay obligación de comparecer a juicio, siendo ello sólo una carga. Así, el que debidamente citado a juicio o emplazado para personarse no lo hiciere en forma en la fecha o plazo indicado, será declarado rebelde..."*³ Por tanto, pese a que los efectos de la declaración de rebeldía han dejado de ser una mera declaración doctrinal y jurisprudencial y han pasado a estar recogidos en la Ley, la comparecencia de las partes continúa siendo una facultad, no una obligación, ya lo hagan, en determinados casos, por si mismas, o bien representadas por procurador, como con carácter general establece el artículo 23 LEC con el uso de la forma verbal: "podrán los litigantes comparecer ... "

En el antiguo derecho romano, el juicio se veía como un sometimiento voluntario de las partes al juez. En Roma era impensable un procedimiento sin una de las partes, por lo que la presencia del demandado se presentaba como una obligación para éste, y, ante el incumplimiento de esta obligación, se imponían sanciones para que efectivamente éste se personase.

³ AP Bizkaia Secc. 5ª 3-7-09

Atendiendo a los principios constitucionales informantes de la relación jurídico procesal, cabe destacar en este punto el principio de contradicción (muy vinculado al principio de igualdad) ya que, sin vigencia de este principio, no hay proceso. Este principio supone que en todo proceso debe de haber un tercero que resuelva aplicando la ley y, por otro lado, al menos dos partes en conflicto, en contradicción: los dos sujetos del conflicto que tiene que enjuiciar el juez⁴. Es el artículo 24 de la Constitución Española el que dispone que en ningún caso puede producirse la indefensión de una persona y el derecho a la defensa⁵. Derecho a la defensa, por tanto, como un derecho fundamental recogido en la norma suprema del derecho nacional español.

Pues bien, en el proceso civil español, y a diferencia de lo que ocurría en el derecho romano, este principio de contradicción se salvaguarda en el momento en el que se ofrece al demandado la posibilidad de ser escuchado, sin ser necesario que éste efectivamente ejercite esta posibilidad. Tal y como indicaba anteriormente, la demanda no impone obligación alguna al demandado, tan solo una carga, dependiendo únicamente de su voluntad el cumplir con ella o no, según su propio criterio. Si nos remontáramos al derecho romano habría una obligación del demandado de comparecer para que pueda desarrollarse el proceso, pero en nuestro sistema, al ser solo necesario el ofrecimiento de la posibilidad de hacerlo, la obligación se transforma en una carga al no depender de su presencia la continuidad del proceso.

Los efectos que se derivan de la declaración de rebeldía son los siguientes:

1. La declaración de rebeldía no debe de considerarse como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, tal y como dispone el art. 496.2 LEC, según el cual *“la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario”*. Es decir, a pesar de la rebeldía del demandado es posible que la demanda sea desestimada. Igualmente, el actor no se libera de la carga probatoria de los hechos. No obstante, tal y como dispone la ley, hay ciertos casos en

⁴ CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín. "El proceso". En: *"Introducción al Derecho Procesal"*. 8ª edición. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2015, página 242.

⁵ Constitución Española.

los que la rebeldía se entiende como la admisión de los hechos alegados en la demanda (arts. 602 y 618 LEC), o incluso la Ley procesal va más allá y establece como efecto directo de la rebeldía nada menos que la estimación íntegra de la demanda (art. 440.2 y 4 y 441.4 LEC); y hasta puede suponer que se abra la ejecución en los términos de la demanda, como prevén los artículos 816 y 825 LEC, en los supuestos de falta de comparecencia en plazo, en los procesos especiales monitorio y cambiario, respectivamente.

2. La rebeldía trae consigo la preclusión, recogida en el art. 136 LEC, según el cual *“transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate”*. La principal consecuencia de esta preclusión es la pérdida de la posibilidad de contestar a la demanda, aunque como ya hemos apuntado, no implica directamente ninguna consecuencia positiva para el actor, el cual deberá realizar los mismos trámites para ver estimada su pretensión como si el demandado hubiera contestado limitándose a negarlo todo.
3. La rebeldía trae consigo un régimen particular de notificaciones de las resoluciones procesales que se vayan dictando a lo largo del proceso. Este régimen aparece recogido en los artículos 497 y 498 de la LEC. Tal y como dispone el artículo 497 en su apartado primero, *la resolución que declare la rebeldía se notificará al demandado por correo, si su domicilio fuere conocido y, si no lo fuere, mediante edictos. Hecha esta notificación, no se llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la resolución que ponga fin al proceso”*.

En cuanto al proceso en rebeldía, éste no presenta ningún trámite específico. Tal y como señalábamos anteriormente, el actor tendrá que probar los hechos alegados en la demanda para que sus pretensiones sean estimadas. Hay que señalar que, el rebelde, como parte en el proceso que es, puede personarse en cualquier momento, sea cual sea el estado del proceso, pero el procedimiento no vuelve atrás en su tramitación. Es decir, el demandado que deja de estar en rebeldía al personarse cuando considera oportuno asume el

momento procesal en el que se encuentre el procedimiento, el cual no se retrotraerá (art. 499 LEC). De esta manera se respeta el principio de preclusión establecido en el artículo 136 de la LEC para los actos procesales.

La resolución que ponga fin al procedimiento se le notificará al demandado rebelde personalmente en la forma prevista en el artículo 161 de la LEC. En caso de que se encontrara en paradero desconocido, la notificación se haría mediante edicto, el cual se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o del Estado (art. 497.2 LEC).

En caso de que el personamiento del demandado tuviera lugar una vez dictada la sentencia o la resolución que pone fin al proceso, podrá interponer los recursos de apelación, casación o por infracción procesal (siempre que se encuentre en plazo).

Existe la posibilidad de que el demandado rebelde inste la nulidad de las actuaciones, lo cual podrá hacerlo basándose en dos situaciones distintas:

1. Cuando se haya colocado al demandado en situación de indefensión al no hacerse correctamente el emplazamiento. Este supuesto se encuentra regulado en el artículo 238, 3º, según el cual *“los actos procesales serán nulos de pleno derecho cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión”*.
2. La segunda posibilidad es la llamada audiencia al rebelde, la cual aparece regulada en el art. 501 de la LEC. Esta figura es la que va a ser objeto de estudio y análisis en el presente trabajo.

3 LA COSA JUZGADA

Al hablar de cosa juzgada nos estamos refiriendo a un estado del proceso, momento procesal al cual se llega tras haberse producido el enjuiciamiento definitivo de la cuestión. Cosa juzgada, por tanto, entendida como el estado jurídico en que se encuentran algunos asuntos o cuestiones que han sido objeto de enjuiciamiento definitivo en un proceso⁶. También al hablar de cosa juzgada podemos referirnos al efecto que producen ciertas resoluciones judiciales, siendo sin duda el más importante de todo el proceso la sentencia definitiva y firme.

3.1 FIRMEZA E INVARIABILIDAD

Dispone el artículo 207.2 de la LEC lo siguiente: *“son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado”*. Por tanto, la firmeza de una resolución puede alcanzarse de dos formas diferentes:

1. Cuando por su propia naturaleza no cabe recurso contra la resolución al no estar previsto por ley. En este caso podría considerarse erróneo el tratar este supuesto como una forma de alcanzar la firmeza, ya que, en este caso, la firmeza es consecuencia lógica de la naturaleza de la resolución al no caber contra ella recurso, es decir, no se alcanza la firmeza, no hay que realizar ninguna conducta activa u omisiva para que la firmeza llegue a producirse, es simplemente el resultado final de una resolución el cual viene ya dado por ella misma.
2. Cuando estando previsto en la ley algún recurso contra la resolución, las partes dejan transcurrir el plazo previsto en la ley para interponerlo sin hacerlo. También entraría dentro de este supuesto el desistimiento del recurso por el recurrente antes de que sobre él recaiga resolución (art. 450) o, por último, el caso en el que se ha incumplido algún requisito por

⁶ DE LA OLIVA SANTOS, Andrés. "La cosa juzgada civil". En: *"Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial"*. 3ª edición. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016, página 321.

parte del recurrente y tiene lugar la inadmisibilidad del recurso o la declaración como desierto (449 LEC). En todos estos casos la firmeza se produce por un acto de las partes, se alcanza tras su actuación, no viene dada, sin más, por la propia resolución, tal y como sucede en el primer supuesto.

La invariabilidad viene recogida en el artículo 214.1 de la LEC, según el cual *“los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan”*. Así mismo, la LOPJ en su artículo 267.1 se refiere a la invariabilidad en los mismos términos que el precepto anteriormente citado.

Invariabilidad, por tanto, como efecto referido a la privación de facultades del tribunal que dicta la resolución para modificar su propia decisión.

Las aclaraciones a las que se refiere el art. 214 de la LEC no se tratan de un método para así modificar las resoluciones, sino que, tal y como su nombre indica, sirven para aclarar algún concepto oscuro y en su caso para rectificar algún error material.

3.2 COSA JUZGADA FORMAL Y MATERIAL

El concepto de cosa juzgada distingue a su vez entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material. Esta expresión aparece recogida en la LEC en los artículos 207 y 222.

La cosa juzgada formal es un efecto interno de las resoluciones judiciales, se refiere al proceso en el que la resolución se dicta⁷. Es decir, durante el proceso, las resoluciones que se vayan adoptando no pueden ser ignoradas, deben de ser tenidas en cuenta ya que la resolución tiene efecto de cosa juzgada formal. El artículo 207 de la LEC en su apartado tercero dispone lo siguiente *“las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso*

⁷ MONTERO AROCA, Juan. “La cosa juzgada”. En: *“Derecho jurisdiccional II. Proceso Civil”*. 27ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, página 495.

en que hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas". Vinculación, por tanto, del tribunal a la resolución adoptada.

Parte de la doctrina considera la cosa juzgada formal como una figura prescindible al equipararla con la firmeza y la irrecurribilidad. Dichos conceptos guardan sin duda una estrecha relación. No obstante, cabe precisar su contenido ya que hacen referencia a conceptos distintos: la cosa juzgada formal no conlleva únicamente la imposibilidad de impugnar la resolución y la imposibilidad de sustituirla por otra distinta, sino que, más bien, hace referencia a la efectividad de la resolución, al respeto que se debe de guardar a la misma por parte del tribunal, atendiendo por tanto a lo dispuesto en ella y a su contenido concreto⁸.

La resolución que ponga fin al proceso si que podrá adquirir, por otro lado, fuerza de cosa juzgada material.

La cosa juzgada material aparece recogida en el artículo 222 de la LEC en su primer apartado de la manera siguiente: *"La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo"*. Por tanto, en caso de que el objeto del nuevo proceso sea igual que el del anterior, no podrá tener lugar. Mientras que al hablar de la cosa juzgada formal decíamos que era un efecto interno de una resolución judicial y referida al procedimiento en que se dicta, la cosa juzgada material tiene un efecto externo al referirse a un procedimiento distinto y, a su vez, posterior al primero. A la vista del artículo 222 de la LEC se puede definir la cosa juzgada material como la vinculación a la decisión adoptada en un primer proceso, excluyendo de esta forma un nuevo proceso con el mismo objeto, es decir, sobre el que ya ha recaído una resolución, ya sea estimatoria o desestimatoria.

Por tanto, si existe un nuevo procedimiento, se debe de partir de la resolución adoptada en un proceso anterior, es decir, de lo ya juzgado, el fondo del asunto del primer proceso.

⁸ DE LA OLIVA SANTOS, Andrés. "La cosa juzgada civil". En: *"Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial*. 3ª edición. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016, página 322.

Se distingue en la cosa juzgada material el aspecto positivo de vinculación por parte del tribunal a la resolución y, por otro lado, el aspecto negativo el cual hace referencia a la firmeza e invariabilidad de la resolución.

Cabe destacar la característica común más importante de la cosa juzgada formal y material: la seguridad jurídica. Más adelante, al explicar los medios excepcionales de impugnación de la cosa juzgada, veremos como esa seguridad jurídica puede verse desvirtuada.

3.3 LÍMITES DE LA COSA JUZGADA

Podemos encontrarnos con tres tipos de límites: subjetivos, objetivos y temporales:

A) Subjetivos

Se refieren a las partes del proceso. Según el artículo 222.3 de la LEC *"la cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamentan la legitimación de las partes (...) Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aunque no hubiera litigado"*.

Al hablar de las partes del proceso es importante destacar que estamos haciendo referencia a la "identidad jurídica", por lo que es posible que, aunque en el primer y segundo proceso se personen personas físicas diferentes, la cosa juzgada puede operar igualmente⁹. Esta cuestión se entiende mejor con un ejemplo: si en el primer juicio comparece el representante de la parte y en el segundo lo hace la parte como tal existiría cosa juzgada (a no ser que el representante actúe en el primer procedimiento en nombre de la parte y en el segundo en nombre propio). Sucedería lo mismo en el caso de menores de edad, en los cuales en el primer proceso comparece alguno de sus padres o su

⁹ MONTERO AROCA, Juan. "La cosa juzgada". En: *"Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil"*. 27ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, página 504.

representante legal y en el segundo proceso el ya mayor de edad al haber alcanzado la mayoría de edad.

A la vista de lo dispuesto en el artículo 222.3 de la LEC, la cosa juzgada despliega sus efectos sobre terceras personas distintas de las partes, que son:

1. Los herederos y causahabientes de las partes.
2. Los sujetos no litigantes titulares de los derechos que fundamentan la legitimación de las partes. Se debe de atender en este caso a lo dispuesto en el artículo 11 de la LEC.
3. Todos los socios en la impugnación de acuerdos societarios (aunque no se hubiera litigado).

B) Objetivos

El ámbito objetivo de la cosa juzgada comprende las distintas acciones afirmadas por el actor expresadas en las distintas pretensiones¹⁰. El artículo 222 de la LEC dispone que *"la cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención"*.

Al incluirse las pretensiones en la cosa juzgada, el autor Andrés de la Oliva Santos entiende (correctamente) que también incluye lo que esté implícita pero necesariamente negado por la afirmación contenida en la sentencia y lo que esté implícita pero inescindiblemente afirmado por la negación que aquélla pueda contener¹¹. Por poner un ejemplo, si en un litigio declara la sentencia que el padre es demandante, se está negando que lo sea el demandado. Si se declara que A fue el que abonó la cantidad, se niega que fuera B o cualquier otro el que lo hizo.

C) Temporales

En los límites temporales debemos diferenciar entre el *dies a quo* y el *dies ad quem*. El *dies a quo* hace referencia al artículo 222.2 de la LEC al decir lo

¹⁰ DE LA OLIVA SANTOS, Andrés. "La cosa juzgada civil". En: *"Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial"*. 3ª edición. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016, página 341.

¹¹ DE LA OLIVA SANTOS, Andrés. "La cosa juzgada civil". En: *"Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial"*. 3ª edición. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016, página 341.

siguiente: “*se considerarán hechos nuevos y distintos los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen*”. Es decir, la sentencia se dicta en consideración al estado de hechos existente en el momento en que precluyen las posibilidades de alegación. Todos los hechos que ocurrieron hasta ese momento, se alegaran o no por las partes, quedan cubiertos por la cosa juzgada¹².

En cuanto al *dies ad quem*, cabe afirmar que la cosa juzgada no se agota, se prolonga en el tiempo de manera indefinida. Se mantiene siempre.

3.4 MEDIOS EXCEPCIONALES DE IMPUGNACIÓN DE LA COSA JUZGADA

Al hablar de la cosa juzgada hemos hablado en primer lugar de la firmeza de las resoluciones firmes a la luz de lo previsto en el artículo 207.2 de la LEC, el cual conviene recordar: “*son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado*”. También hemos hecho referencia a la invariabilidad de la cosa juzgada, recogida en el artículo 214.1 de la LEC.

Conviene volver a citar en este apartado el artículo 207.2 de la LEC ya que una de las excepciones al mismo es la que da título a este trabajo: la audiencia al demandado rebelde.

Como acabamos de ver, dicho precepto dispone que contra las resoluciones firmes no cabe recurso alguno. A la vista de esta definición se entiende que en ningún caso cabe contra una resolución firme recurso. No obstante, tal y como vamos a ver a continuación, es posible impugnar la cosa juzgada.

Siendo cierto que la regla general es la citada en el precepto, en ciertas ocasiones, de manera muy excepcional, se permite la impugnación de la cosa juzgada. Hablamos de los medios excepcionales de impugnación. Se debe de hacer énfasis en la excepcionalidad de estos medios de impugnación ya que

¹² MONTERO AROCA, Juan. “La cosa juzgada”. En: “*Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil*”. 27ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, página 508.

implica desconocer la irrecurribilidad y la irrevocabilidad antes mencionadas de las resoluciones judiciales, pero se trata, en definitiva, de la última exigencia de la justicia frente a la seguridad jurídica¹³.

En efecto, la seguridad jurídica es uno de los elementos más importantes de cualquier sistema judicial ya que es el que otorga sentido a todo el proceso. Se podría entender como el objetivo último y final de todo el sistema, la seguridad, la cual se consigue con una decisión irrevocable.

Imaginemos que cualquier persona que consiga una sentencia favorable en cualquier tipo de procedimiento no pueda tener nunca la tranquilidad que debe derivar de la firmeza de la resolución ya que, en cualquier momento, otro juez podría entender una cosa distinta y dejar sin efecto la primera resolución. De ahí la necesaria excepcionalidad de estos medios de impugnación de la cosa juzgada.

Pues bien, en nuestro sistema existen como tal dos medios de impugnación de la cosa juzgada: el juicio de revisión de sentencias firmes y la audiencia al demandado rebelde.

Si bien la LEC contempla la llamada nulidad de actuaciones, para que ésta produzca efectos y se pueda declarar la nulidad es necesario que el proceso esté pendiente, es decir, todavía no se ha dictado la resolución que trae consigo el fin y la irrecurribilidad del proceso.

Por otro lado, si nos fijamos en el derecho comparado, en Italia y Francia existe una figura la cual no está contemplada en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil: la oposición de tercero. En estos países, la persona que se ve perjudicada por un proceso en el que no es parte puede oponerse adoptando una posición activa. En España la única posibilidad es adoptar una posición pasiva de espera.

En cuanto al juicio de revisión de sentencias firmes, no se trata de un recurso como tal, ya que se trata de un nuevo proceso. Aparece regulado en el Título VI del libro del Libro II de la LEC. No procede en este trabajo profundizar en el juicio de revisión de sentencias firmes, pero sí que es de importancia

¹³ MONTERO AROCA, Juan. "Impugnación de la cosa juzgada". En: *"Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil"*. 27ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, página 512.

señalar los motivos por los que puede tener lugar este proceso. Aparecen recogidos en el artículo 510 de la LEC. Son los siguientes:

1.º Si después de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.

2.º Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya falsedad declarare después penalmente.

3.º Si hubiere recaído en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o los peritos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.

4.º Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta.

2. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.

4 LA AUDIENCIA AL REBELDE

4.1 CONCEPTO Y NATURALEZA

Tal y como señalábamos en el apartado anterior, la audiencia al demandado rebelde se trata de un medio de impugnación de la cosa juzgada. Medio, por tanto, excepcional al cual solo se puede acudir en determinadas ocasiones señaladas por la ley.

Al hablar de su naturaleza, es de gran importancia señalar que la rescisión de sentencia firme no se configura en la Ley como un recurso, sino como un *"proceso especial en el que se sustancia la acción con finalidad rescisoria de sentencias firmes que se concede al demandado rebelde"*.¹⁴ Así lo señaló el Tribunal Constitucional.

Las consecuencias de no atribuir al procedimiento de audiencia al rebelde la naturaleza propia de un recurso son de gran importancia, reflejado, por ejemplo, en el Auto de la sala 1ª del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2008, en el cual el TS entiende que, precisamente por dicha razón, no ha lugar a la aplicación de oficio de la competencia para conocer de los recursos del artículo 62 de la LEC *"porque la demanda de rescisión de sentencia firme a instancias del rebelde no tiene la naturaleza de recurso"*.¹⁵

Es importante destacar al hablar de la audiencia al rebelde, y al igual que hicimos al tratar la rebeldía, el principio de contradicción. Este principio constitucional informante de la relación jurídico procesal supone, tal y como señalábamos en la rebeldía, que en todo proceso debe de haber una persona que resuelva aplicando la ley y, por lo menos, dos partes en conflicto o en contradicción¹⁶. En nuestro sistema procesal, este principio de contradicción se salvaguarda mediante el ofrecimiento a la otra parte de la posibilidad de ser escuchada, no siendo por tanto necesario el efectivo ejercicio de dicha posibilidad. Es decir, para que el proceso se desarrolle y pueda concluir no es

¹⁴ TC 1ª 11/2009

¹⁵ TS 1ª Auto de 18/1/2008. Recurso de Casación nº 1/2007

¹⁶ CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín. "El proceso". En: *"Introducción al Derecho Procesal"*. 8ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, página 242.

necesaria la comparecencia en forma de la otra parte; no depende de su presencia.

4.2 MOTIVOS QUE PERMITEN APRECIARLA

Para que pueda concederse la audiencia al rebelde es necesario que se haya seguido un proceso con una persona declarada en rebeldía y que, por tanto, se haya dictado una sentencia en rebeldía. Estamos hablando en todo momento de un medio de impugnación de sentencias firmes, por lo que la firmeza de esta resolución no se cuestiona y es equiparable a la firmeza de cualquier otra sentencia.

El motivo que lleva a la audiencia es la imposibilidad de haber oído al demandado durante el transcurso del proceso por motivos que no se le pueden imputar. El artículo 500 de la LEC dispone que el demandado rebelde podrá interponer contra la sentencia únicamente el recurso de apelación y el extraordinario por infracción procesal o el de casación, variando el plazo dependiendo de si la sentencia se le ha notificado personalmente o se ha publicado mediante edicto. No obstante, el artículo 501 del mismo cuerpo legal nos dice que procede la rescisión de la sentencia firme a instancia del rebelde en tres supuestos:

1. Fuerza mayor ininterrumpida. Este supuesto se da cuando una causa de fuerza mayor ha impedido al demandado rebelde comparecer en todo momento, con independencia de que tuviera conocimiento del pleito por haber sido citado o emplazado en forma.
2. Desconocimiento de la demanda y del pleito cuando la citación o el emplazamiento se hubieren practicado por cédula y ésta no hubiese llegado a poder del demandado rebelde por causa que no le sea imputable.
3. Desconocimiento de la demanda y del pleito cuando el demandado rebelde haya sido citado o emplazado por edictos y haya estado ausente del lugar en que se haya seguido el proceso y de cualquier otro lugar del Estado o de la Comunidad Autónoma, en cuyos Boletines Oficiales se hubiesen publicado aquéllos.

Existe, por tanto, un supuesto en el que a pesar de tener conocimiento del proceso se permite la rescisión al existir una causa de fuerza mayor que impidió al demandado rebelde comparecer y, por otro lado, dos supuestos en los que el demandado rebelde desconocía por completo la existencia del proceso.

El artículo 502 de la LEC establece los plazos de caducidad para interponer la acción de rescisión por parte del demandado, variando los mismos dependiendo de si la notificación de la sentencia firme se ha practicado personalmente o mediante edicto. Estos plazos pueden prorrogarse hasta un máximo de 16 meses, según los casos que explicaré más adelante.

Así mismo, el artículo 503 de la LEC señala, tal y como apuntábamos antes, la exclusión de la rescisión de sentencias sin efectos de cosa juzgada. La sentencia debe tener efectos de cosa juzgada para que pueda proceder la acción de rescisión por parte del demandado rebelde.

4.3 LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

Podría entenderse que tras interponer demanda de rescisión uno de sus efectos es la suspensión de la ejecución de la sentencia que pretende rescindirse. Sin embargo, el artículo 504 de la LEC en su apartado primero dispone lo siguiente: *"Las demandas de rescisión de sentencias firmes dictadas en rebeldía no suspenderán su ejecución, salvo lo dispuesto en el artículo 566 de esta Ley"*. Por tanto, la regla general es la de la no suspensión de la ejecución de la sentencia, lo cual, en caso de que posteriormente se rescinda la misma, podría traer consigo consecuencias muy negativas para el demandado rebelde.

Por otro lado, el artículo 505 de la LEC en su apartado segundo dispone lo siguiente: *"A instancia de parte, el tribunal de la ejecución deberá acordar la suspensión de la ejecución de la sentencia rescindida, si, conforme a lo previsto en el artículo 566, no hubiere ya decretado la suspensión"*. En caso de que se estime la pretensión del demandado rebelde de rescindir la sentencia del proceso anterior, deberá de ser éste el que pida la suspensión de la ejecución de la sentencia rescindida.

El artículo 566 de la LEC regula la suspensión de la ejecución en el caso de que se admita la demanda de rescisión de sentencia firme dictada en rebeldía (o de revisión para el juicio de revisión de sentencias firmes). Este precepto la regula la excepción a la regla general del artículo 505 de la no suspensión de la ejecución de la sentencia firme.

El tribunal competente para la ejecución no puede acordar la suspensión de oficio, debe de ser a instancia de parte. Para acordar la suspensión, dice el precepto, *"el tribunal deberá exigir al que la pida caución por el valor de lo litigado y los daños y perjuicios que pudieren irrogarse por la inejecución de la sentencia. Antes de decidir sobre la suspensión de la ejecución de la sentencia objeto de revisión, el tribunal oirá el parecer del Ministerio Fiscal"*. Se opta por la caución como medio para salvaguardar los intereses de la persona que consiguió en el proceso anterior la sentencia firme a su favor.

Así mismo, en caso de que finalmente se conceda la suspensión de la ejecución, el apartado segundo del mismo precepto señala que *"se alzaré la suspensión de la ejecución y se ordenará que continúe cuando le conste al letrado de la administración de justicia responsable de la ejecución la desestimación de la revisión o de la demanda de rescisión de sentencia dictada en rebeldía"*.

En el momento en que se rescinda la sentencia dictada en rebeldía y se dicte sentencia absolutoria del demandado, dice el apartado tercero, se sobreseerá por el letrado de la administración de justicia la ejecución.

Es lógico que se deba de prestar caución por parte del que quiera que se suspenda la ejecución, ya que, si bien la audiencia al demandado rebelde es un proceso excepcional, el cual protege a una de las partes, no se debe de descuidar a la otra parte, la cual ha obtenido una sentencia firme favorable y por una situación excepcional prevista en nuestro ordenamiento no puede gozar de la tranquilidad o estabilidad que debería de darle la permanencia en el tiempo de una sentencia favorable la cual ha ganado firmeza. Se podría atentar contra su derecho a la tutela judicial efectiva.

4.4 FASES DE LA AUDIENCIA

En el procedimiento de la audiencia al demandado rebelde pueden diferenciarse dos fases en el proceso: la fase de concesión y la posterior fase de sustanciación.

Fase de concesión

Para que pueda concederse la audiencia es necesario que se cumpla el requisito del artículo 501 de la LEC, es decir, que el demandado haya permanecido constantemente en rebeldía. La rebeldía, tal y como prevé el precepto, ha de ser constante, es decir, el demandado rebelde no debe de haberse personado en ningún momento del proceso y no puede haber interpuesto contra la sentencia ninguno de los posibles recursos que caben contra la misma (recurso de apelación, de infracción procesal o de casación).

Los requisitos para la concesión de la audiencia son los previstos en el artículo 501 analizado anteriormente, es decir, la fuerza mayor y el desconocimiento de la demanda y del pleito, variando esta posibilidad según si la citación se hizo mediante cédula o mediante edicto: si se hizo mediante cédula se deberá de probar que la misma no llegó a su poder por motivos no imputables a su persona, mientras que si la citación se hizo por medio de edicto deberá de acreditar el haber estado ausente del lugar en que se haya seguido el proceso y de cualquier otro lugar del Estado o de la Comunidad Autónoma en cuyos Boletines Oficiales se hubieran publicado los edictos (artículo 501 LEC).

Es necesario para la concesión de la audiencia que se de uno de los supuestos mencionados, no necesitándose para la concesión de la misma más de uno de ellos. Es decir, si existe fuerza mayor no hace falta probar el desconocimiento de la demanda y del pleito, y viceversa.

A la vista de los requisitos para la concesión de la audiencia cabe mencionar que si se produjo la rebeldía del demandado no fue por su propia voluntad. Tanto el reconocimiento de la fuerza mayor como del desconocimiento de la demanda y del pleito lo que hacen es excluir la posible voluntad del demandado de no comparecer. Si se ha llegado a declarar al demandado en rebeldía es por un motivo no imputable al mismo. Esta involuntariedad es la que

permite la concesión de la audiencia y la posible rescisión de la sentencia dictada en rebeldía.

Conoce de la solicitud de la sentencia firme, tal y como dispone el artículo 501 de la LEC, el tribunal que hubiere dictado la sentencia respecto de la que se pide la rescisión.

La solicitud en plazo de la rescisión de la sentencia es otro requisito para que pueda tener lugar la audiencia y concederse la rescisión, tal y como dispone el artículo 502 de la LEC en el que se incluyen los diferentes plazos previstos:

- Si la notificación se hubiere practicado personalmente, el plazo será de 20 días a partir de la notificación de la sentencia firme.
- Si la notificación no se practicó personalmente, el plazo será de 4 meses a partir de la publicación del edicto de notificación de la sentencia firme.
- Estos plazos pueden prolongarse si subsiste la fuerza mayor, pero en ningún caso podrá ejercitarse la acción de rescisión una vez transcurridos 16 meses desde la notificación de la sentencia.

A la vista del artículo 504.2 de la LEC, la pretensión de rescindir la sentencia firme dictada en rebeldía deberá de seguir los trámites establecidos para el juicio ordinario, que podrá ser iniciado por quienes hayan sido parte en el proceso.

Conoce de esta primera fase, tal y como dispone el artículo 501 de la LEC, el tribunal que hubiera dictado la sentencia de la que ahora se pide su rescisión. La sentencia que dicte el tribunal podrá, por un lado, declarar que no cabe la audiencia al rebelde y, por lo tanto, tampoco la rescisión de la sentencia firme dictada en rebeldía. Por otro lado, el tribunal puede estimar la pretensión de rescindir la sentencia y de que tenga lugar la audiencia al rebelde. Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así, la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Valencia el 24 de enero de 2003 desestimó entrar a valorar un recurso de apelación contra la desestimación de una demanda para la rescisión de una sentencia firme dictada en rebeldía. La admisión de esta demanda contravendría el principio de

irrecurribilidad de esa sentencia. La Sala no tiene competencia funcional para entrar a conocer de ese recurso devolutivo.¹⁷

Puede ser una cuestión que de lugar a la controversia la no admisión de ningún recurso contra esta resolución. La Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Toledo de 16 de septiembre de 2008 nos recuerda lo siguiente: *"Como ha declarado el Tribunal Constitucional, el legislador, salvo en materia penal que le viene impuesto por los tratados internacionales, es libre de establecer los recursos que las partes pueden ejercitar contra las resoluciones judiciales, por lo que no infringe derecho alguno el establecimiento de sentencias irrecurribles. Una vez que el legislador ha optado por conferir a una resolución el carácter de recurrible la interpretación que ha de hacerse ha de ser la más favorable para el ejercicio del mismo, so pena de entender vulnerado el derecho de la tutela judicial efectiva"*¹⁸. Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva incidiremos más adelante.

En caso de que el tribunal declare no haber lugar a la rescisión, las costas, tal y como dispone el artículo 506 de la LEC, se impondrán en su totalidad al litigante condenado en rebeldía. Si se dictare sentencia estimando procedente la revisión, sigue diciendo el artículo en su apartado segundo, no se impondrán las costas a ninguno de los litigantes, salvo que el tribunal aprecie temeridad en alguno de ellos.

Fase de sustanciación

La fase de concesión de la audiencia puede concluir con una sentencia en la cual se rescinda la sentencia firme dictada en rebeldía y se declare que cabe la audiencia al rebelde. En este caso, el demandado rebelde no podrá volver a adoptar una posición de inactividad ya que, en ese caso, se volverá a dictar una nueva sentencia en los mismos términos que la sentencia rescindida, tal y como dispone el artículo 508 de la LEC.

¹⁷ AP Valencia Secc. 6ª de 24 enero 2003

¹⁸ AP Toledo Secc. 1ª 16-9-08

De esta fase conoce el órgano competente para conocer de la primera instancia del juicio de que se trate. La fase de sustanciación consiste en la reproducción del juicio desde el punto de vista del demandado¹⁹.

La LEC recoge el procedimiento seguido en esta fase de sustanciación en su artículo 507. A tenor del mismo:

1. Se entregarán los autos por diez días al demandado para que pueda exponer y pedir lo que a su derecho convenga, en la forma prevenida para la contestación a la demanda.
2. De lo que se expusiere y pidiere se conferirá traslado por otros diez días a la parte contraria, entregándole las copias de los escritos y documentos.
3. En adelante, se seguirán los trámites del juicio declarativo que corresponda, hasta dictar la sentencia que proceda, contra la que podrán interponerse los recursos previstos en esta Ley.

¹⁹ MONTERO AROCA, Juan. "Impugnación de la cosa juzgada". En: *"Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil"*. 27ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, página 522.

5 CUESTIÓN SIN RESOLVER: ¿HASTA DÓNDE LLEGA LA RESCISIÓN?

Tal y como hemos apuntado en el apartado anterior, la fase de concesión puede terminar con una sentencia en la cual se declare que ha lugar la audiencia al rebelde. En este caso, la sentencia rescinde a la anterior sentencia firme dictada en rebeldía.

No obstante, ante la ambigüedad de la Ley en lo referente a esta cuestión, debe ser objeto de estudio los efectos de la rescisión sobre la sentencia impugnada y rescindida, es decir, hasta dónde llega.

En primer lugar, se entiende que la rescisión no se extiende a la demanda inicial del proceso en el cual se dictó la sentencia ahora rescindida, ya que el artículo 507 en su apartado primero nos señala que, una vez estimada la pretensión del demandado rebelde (y, por tanto, rescindida ya la sentencia anterior), se entregarán los autos por diez días al demandado para que pueda exponer y pedir lo que a su derecho convenga, en la forma prevenida para la contestación a la demanda. Es decir, el nuevo proceso comienza con la contestación a la demanda por parte del demandado, entendiendo como válida la demanda del proceso anterior.

Mayor problemática es la referente a los actos de prueba. No se sabe con seguridad si la rescisión comprende todas las actuaciones del anterior proceso. La LEC en su articulado deja esta cuestión sin resolver. Autores como Juan Montero Aroca o Ignacio Díez-Picazo Giménez sostienen que los actos de prueba no deben de verse afectados por la rescisión ya que se realizaron en su momento según lo dispuesto en la Ley²⁰.

A pesar de ser cierta tal afirmación, en caso de entenderse que los medios de prueba no se ven afectados por la rescisión, debe de buscarse otra base para llegar a tal conclusión, ya que la simple validez del acto realizado en su momento me parece insuficiente para alcanzar tal conclusión. En mi opinión, a este razonamiento se llega teniendo en cuenta el sistema anterior, en el que estaba

²⁰ MONTERO AROCA, Juan. "Impugnación de la cosa juzgada". En: *"Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil"*. 27ª edición. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2019, páginas 522-523.

claro que los medios de prueba seguían siendo válidos. Sin embargo, a la vista del artículo 507 de la LEC, el cual retrotrae el proceso al momento de la contestación a la demanda, los medios de prueba deben necesariamente verse afectados por la rescisión.

La simple validez del acto en cuestión no puede ser motivo para que éste se excluya de la rescisión, ya que, si reducimos a este argumento todos los actos del proceso, la misma sentencia firme dictada en rebeldía podría entenderse como inmune a la rescisión al ser válida según lo dispuesto en la Ley.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias del 14 de abril de 2005 se pronunciaba en los términos siguientes: *"las consecuencias que derivan de la estimación de un juicio de revisión, según resulta de lo así expresamente establecido en el Art. 507 de la L.E. Civil, es la anulación de la sentencia (...) pero no de todo el procedimiento, que simplemente se retrotrae a la fase de alegaciones para dar posibilidad de completarla con la presencia contradictoria de los demandados que involuntariamente se habían mantenido en rebeldía"*²¹.

Esta Sentencia se pronuncia sobre la caducidad de la acción, aunque en ese párrafo deja claro el efecto de la rescisión de la sentencia, retrotrayendo el proceso al momento de las alegaciones y dejando por tanto sin efecto la práctica de prueba, momento procesal posterior al de las alegaciones.

Existe, por tanto, cierta contradicción entre la doctrina y la jurisprudencia, debiéndonos de inclinar hacia la interpretación de los tribunales.

Parece claro que el legislador debería de aclarar esta cuestión introduciendo una previsión en el artículo 507 (tal y como constaba en la anterior LEC), ya que algo tan relevante para el fin último del proceso no debería de quedar al arbitrio de los tribunales.

²¹ AP Asturias Secc. 6ª 14-3-05

6 VISIÓN JURISPRUDENCIAL ACTUAL

Es necesario ofrecer en este trabajo una visión de la figura de la audiencia al demandado rebelde reflejada en las sentencias más recientes del Tribunal Supremo. Veamos con detenimiento dos sentencias del año 2019.

En primer lugar, la STS 3744/2019 de 22 de noviembre de 2019 (recurso 45/2018), en la cual nos encontramos ante una demanda de revisión fundada en la existencia de una maquinación fraudulenta del artículo 510.4º de la LEC.

La sentencia que ahora se recurre fue dictada en rebeldía, pero, tal y como señala el tribunal en el fundamento de derecho número cuarto apartado segundo, *"lo que se denuncia no encaja en los supuestos previstos en el art. 501 LEC"*, es decir, no estamos hablando de un supuesto de fuerza mayor ininterrumpida ni de desconocimiento de la demanda y del pleito.

Se trata de un supuesto de maquinación fraudulenta, existente según lo expuesto por el tribunal en el fundamento de derecho número quinto apartado primero *"cuando quien ejercita una acción judicial oculta el domicilio de la persona contra la que estaba dirigida, alegando que lo desconoce para interesar que se le emplace por edictos y se sustancie el procedimiento en rebeldía"*. Sigue diciendo el tribunal: *"no sólo cuando se oculta el domicilio o lugar en el que podría emplazarse de forma efectiva a la demandada, para provocar un emplazamiento por edictos, sino también cuando se simula un emplazamiento personal a través de quien ya no tiene la representación de la sociedad y además está relacionado con el demandante.."*²².

Por otro lado, la STS 898/2019 de 20 de marzo de 2019 (recurso 1883/2016) resuelve sobre un recurso extraordinario por infracción procesal, regulado en los artículos 468 a 476 de la LEC. Este recurso se dirige contra resoluciones dictadas en grado de apelación y sirve para excluir la firmeza de la sentencia dictada en apelación.

²² STS 3744/2019 de 22 de noviembre del 2019

En el caso ante el que nos encontramos, la sentencia que posteriormente se recurre en apelación fue dictada en rebeldía. El Sr. Samuel fue declarado rebelde y la sentencia se le notificó por edictos, personándose posteriormente para así poder interponer recurso de apelación contra la sentencia dictada en rebeldía.

La declaración de rebeldía, tal y como hemos visto, no impide personarse posteriormente para así poder participar de forma activa en el proceso, en este caso mediante un recurso de apelación para así evitar la firmeza de la sentencia e intentar ver satisfechas sus pretensiones.

Tal y como vemos en este procedimiento, el recurso extraordinario por infracción procesal es compatible con la declaración al demandado como rebelde. Sin embargo, la gran diferencia entre este recurso extraordinario por infracción procesal y la audiencia al demandado rebelde es que en el segundo caso la sentencia que se pretende rescindir ya ha adquirido firmeza, mientras que en el recurso extraordinario por infracción procesal se evita que la sentencia adquiriera firmeza precisamente mediante la interposición del recurso.

Estas dos sentencias refuerzan la idea de la excepcionalidad de la figura de la audiencia al demandado rebelde. Es decir, la declaración de rebeldía no supone automáticamente la posibilidad de una audiencia al declarado en rebeldía, sino que deben de ponerse en marcha otros mecanismos como los utilizados en estas resoluciones para conseguir cambiar el sentido de la sentencia dictada en rebeldía. La audiencia, por tanto, es un medio excepcional reservado a los supuestos señalados en la LEC en su artículo 501.

7 CONCLUSIONES

Llegados a este punto en el que ya hemos hecho un análisis de la figura de la audiencia al demandado rebelde conviene hacer, a modo de valoración y crítica personales, unos comentarios finales acerca de esta figura.

7.1 EXCEPCIONALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA

En primer lugar, y sin querer parecer repetitivo en esta cuestión, hay que resaltar la excepcionalidad de esta figura. La audiencia al demandado rebelde, al fin y al cabo, rompe la seguridad jurídica, la cual debe primar en cualquier procedimiento y en todo el sistema judicial. Es, a mi modo de entender el Derecho, el fin último que se debe de salvaguardar en todo momento.

En el momento en que una persona obtiene una sentencia favorable y ésta alcanza la firmeza, debería ser motivo más que suficiente para estar tranquilo y seguro después de un procedimiento judicial (normalmente no muy agradable para ningún ciudadano), consecuencia lógica de tal resolución. La audiencia al demandado rebelde, si bien de manera legítima, rompe con esto.

El artículo 24 de la Constitución Española recoge el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en los siguientes términos: *"Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión"*.²³ Este mismo artículo enfrenta al demandante y al demandado rebelde: por un lado, el derecho a la tutela judicial efectiva reflejado en la irrecurribilidad de una sentencia firme favorable; por otro lado, el derecho a la tutela judicial efectiva plasmado en la imposibilidad de que pueda producirse la indefensión.

La aceptación y legitimidad de una figura como esta en nuestro ordenamiento jurídico debe de obedecer a una regulación muy precisa y detallada por parte del legislador en la LEC, ya que, de no ser así, se estaría atentando contra la seguridad jurídica.

²³ Constitución Española.

La excepcionalidad de esta figura debe de observarse en los supuestos en los que cabe la rescisión de la sentencia firme mediante la audiencia al demandado rebelde, que son, tal y como analizamos anteriormente, la fuerza mayor ininterrumpida y el desconocimiento de la demanda y del pleito, se haya citado al demandado rebelde por cédula o mediante edictos.

7.2 LA FUERZA MAYOR

No cabe ninguna duda de que la fuerza mayor ininterrumpida es el motivo más lícito para que pueda llegar a rescindirse la sentencia firme y tenga lugar la audiencia al demandado rebelde. La LEC no define ni precisa el concepto de fuerza mayor ininterrumpida, dejando al arbitrio de los tribunales discernir los casos en los que puede tener lugar.

Bajo mi punto de vista, es la misma LEC la que debería de precisar los casos en los que tiene lugar la fuerza mayor, aunque sea de forma negativa, excluyendo los casos en los que no puede apreciarse. La excepcionalidad de esta figura y la salvaguarda de la seguridad jurídica deben plasmarse, reitero, en una exhaustiva tasación de los supuestos en los que puede admitirse la demanda de rescisión de sentencia firme a instancias del rebelde.

En cualquier caso, a la apreciación de la fuerza mayor ininterrumpida debe de precederle una fuerte actividad probatoria por parte del demandado rebelde, no pudiendo ser fácil probar un impedimento para comparecer a lo largo de todo el procedimiento. Es de gran dificultad, por tanto, su apreciación.

7.3 LA FIGURA DEL EDICTO EN LA ACTUALIDAD

Mayor problema plantea, en mi opinión, el desconocimiento de la demanda y del pleito cuando se emplaza mediante edictos. Este supuesto hace referencia a los casos en los que el demandado se encuentre en el extranjero, por lo que no ha podido tener conocimiento de los edictos publicados en el lugar donde se ha seguido el proceso o en cualquier otro lugar del Estado o de la Comunidad Autónoma en cuyos Boletines Oficiales se hubieran publicado los edictos.

Nótese la diferencia con el apartado segundo del artículo 501 referente al desconocimiento del pleito y de la demanda cuando se practica el

emplazamiento mediante cédula, la cual no llega al poder del demandado rebelde "por causa que no le sea imputable". En el caso del emplazamiento mediante cédula se requiere la ausencia de una actitud culposa o dolosa por parte del demandado rebelde para que pueda apreciarse el supuesto que provoque la rescisión de la sentencia firme. En el emplazamiento mediante edictos nada se dice acerca de una posible actitud dolosa del demandado rebelde, siendo suficiente para pretender la rescisión de la sentencia firme la ausencia del lugar en que se haya citado mediante edicto.

A mi parecer, este motivo para poder rescindir una sentencia firme dictada en rebeldía es abusivo y ataca de manera directa el principio de seguridad jurídica, principalmente por dos razones:

1. En primer lugar, este supuesto podría ser utilizado de manera dolosa por el demandado rebelde para así poder llegar a conseguir su pretensión. Una persona que previsiblemente prevea que va a ser demandada podría irse al extranjero únicamente para evitar ser citado y personarse. La ausencia de previsión en la Ley de una actitud dolosa por la cual se decide ir al extranjero para evitar el emplazamiento da pie a esta conducta fraudulenta.
2. En segundo lugar, la citación edictal es, siempre desde mi punto de vista, una figura desfasada y superada por los tiempos en los que nos encontramos. La incidencia de las nuevas tecnologías en el mundo jurídico, al igual que en casi todos los sectores y profesiones, es ya una realidad, reflejada, por ejemplo, en los medios telemáticos. En relación con el desconocimiento de la citación edictal para poder llegar a rescindir una sentencia firme, carece de sentido. En el mundo globalizado en el que nos encontramos, hay medios mucho más eficaces para localizar a una persona que la publicación de un edicto.

Se podría decir que una persona a la cual no se puede localizar es por dos motivos: la fuerza mayor (ya recogida en el punto primero) y una actitud activa para evitar ser localizada, supuesto el cual no debe estar protegido por la Ley.

No obstante, podría llegar a darse un supuesto en el que una persona verdaderamente ha estado ilocalizable durante el proceso. En estos casos (más bien de laboratorio), la persona perjudicada podría alegar la fuerza mayor, y, en caso de no apreciarse, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. Sería un supuesto de indefensión, aunque debería de quedar siempre cubierto por la existencia de fuerza mayor.

7.4 RESCISIÓN Y RECURSO: DIFERENCIAS Y SIMILITUDES

Por último, y a modo de apunte final de este trabajo, merece una reflexión la no consideración de la rescisión de sentencia firme como un verdadero recurso. Tal y como hemos visto, el Tribunal Constitucional apuntó en una de sus sentencias que no se trataba de un verdadero recurso, sino de un proceso especial, negándole de esta manera los efectos propios de un recurso.

Se podría definir un recurso como aquel acto de impugnación de las partes dirigido a atacar una resolución judicial de cualquier clase, que pretende provocar su anulación o su reforma²⁴. Bajo esta definición se podría incluir sin ningún tipo de problema la rescisión de sentencia firme por medio de la audiencia al rebelde al tratarse de un acto dirigido a atacar una sentencia firme para así poder conseguir su reforma.

A pesar de esto, uno de los efectos de los recursos es impedir la firmeza de la resolución. Si bien en la rescisión no puede evitarse la firmeza de la resolución, el resto de requisitos y características propias de un recurso son cumplidas por esta figura, no debiéndole negar los efectos y beneficios de la figura del recurso, como por ejemplo la apreciación de oficio por el tribunal de la competencia para conocer del recurso, prevista en el artículo 62 de la LEC. Ya vimos que el TC negó el poder aplicar este precepto a la rescisión de una sentencia firme a instancias del demandado rebelde.

Son, a mi parecer, figuras análogas a las cuales la Ley debería de proporcionar el mismo tratamiento. Obsérvese que la LEC en su artículo 500 regula los recursos ordinarios que puede ejercer el demandado rebelde y, justo

²⁴ ARMENTA DEU, Teresa. "Lecciones de derecho procesal civil". 11ª edición. Madrid: Marcial Pons, 2018, página 269.

en el artículo siguiente, el 501, la rescisión de sentencia firme a instancias del rebelde. Atendiendo a esta forma de redactar la Ley, comprendo que el legislador entendió la rescisión de sentencia firme como un recurso de carácter extraordinario a disposición del demandado rebelde para los casos previstos en el artículo, al cual, por lo tanto, no se le debería de privar de las disposiciones legales aplicables a los recursos.

8 BIBLIOGRAFIA

Libros

ARMENTA DEU, Teresa. "Lecciones de derecho procesal civil". 11ª edición. Madrid: Marcial Pons, 2018, página 269.

Capítulos de libros

MONTERO AROCA, Juan. "Impugnación de la cosa juzgada". En: *"Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil"*. 27ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, página 512.

CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín. "El proceso". En: *"Introducción al Derecho Procesal"*. 8ª edición. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2015, página 242.

DE LA OLIVA SANTOS, Andrés. "La cosa juzgada civil". En: *"Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial"*. 3ª edición. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016, página 321.

DE LA OLIVA SANTOS, Andrés. "La cosa juzgada civil". En: *"Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial"*. 3ª edición. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016, página 322.

MONTERO AROCA, Juan. "La cosa juzgada". En: *"Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil"*. 27ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, página 504.

DE LA OLIVA SANTOS, Andrés. "La cosa juzgada civil". En: *"Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial"*. 3ª edición. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016, página 341.

MONTERO AROCA, Juan. "La cosa juzgada". En: *"Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil"*. 27ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, página 508.

MONTERO AROCA, Juan. "Impugnación de la cosa juzgada". En: *"Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil"*. 27ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, página 512.

CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín. "El proceso". En: *"Introducción al Derecho Procesal"*. 8ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, página 242.

MONTERO AROCA, Juan. "Impugnación de la cosa juzgada". En: *"Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil"*. 27ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, página 519.

MONTERO AROCA, Juan. "Impugnación de la cosa juzgada". En: *"Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil"*. 27ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019, página 522.

MONTERO AROCA, Juan. "Impugnación de la cosa juzgada". En: *"Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil"*. 27ª edición. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2019, páginas 522-523.

Textos legales

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Constitución Española.

Jurisprudencia

AP Bizkaia Secc. 5ª 3-7-09

TC 1ª 11/2009

TS 1ª auto 18-1-08. Recurso de Casación nº 1/2007

AP Valencia Secc. 6ª de 24 enero 2003

AP Toledo Secc. 1ª 16-9-08

AP Asturias Secc. 6ª 14-3-05

STS 3744/2019 de 22 de noviembre del 2019 (recurso 45/2018)

STS 898/2019 de 20 de marzo del 2019 (recurso 1883/2016)